

www.cibereduca.com



V Congreso Internacional Virtual de Educación
7-27 de Febrero de 2005

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN

Beatriz Quirós

Catedrática de Francés en el IES Rosario Acuña de Xixón, en Asturias.
Miembro del Consejo Escolar del Estado en representación de la Confederación de STEs-
intersindical.

Responsable de Política Educativa de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y
Trabajadores de la Enseñanza-Intersindical

Introducción

Las políticas educativas en nuestro continente vienen marcadas por lo que se ha dado en llamar la “Estrategia de Lisboa”, pues en el pasado año 2000 tuvo lugar en la capital portuguesa la adopción por parte del Consejo Europeo del objetivo estratégico para la Unión europea de “convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo”. En el documento “Los objetivos concretos futuros de los sistemas educativos” la comisaria europea encargada de temas educativos Viviane Reding plantea que ese es el objetivo primordial de los sistemas educativos europeos.

La mayoría de dirigentes políticos y patronales se han encargado de difundir ampliamente la concepción de que la escuela debe estar al servicio de la competencia económica y por lo tanto debe estar cada vez más ligada al mundo empresarial.

A través de la jerga neoliberal que encontramos en los documentos de quienes tienen poder decisorio en el ámbito educativo europeo, se abandona la idea de que la escuela es una institución pública destinada a formar ciudadanas y ciudadanos. Ahora lo moderno es utilizar términos como la formación de “capital humano”, en estrecha colaboración con “el destinatario del servicio”, es decir, el patrón. Términos como “sociedad del conocimiento”, “aprendizaje a lo largo de toda la vida”, “aprender a aprender”, “empleabilidad”, forman parte de esta neolengua utilizada cada vez por más “agentes sociales”. La escuela debe formar, según esta nueva moda neoliberal, para el mercado, y debe tener en cuenta las demandas de los empresarios.

Sólo así, dicen, se podrá acabar con el paro y hacer frente a los competidores del otro lado de los mares, sobre todo EEUU y Japón.

La Comisión europea pretende pues, convertir una de las mayores conquistas de los trabajadores y trabajadoras en nuestro continente, es decir, el acceso casi universal a un bien social y a un derecho humano como es la educación, en un negocio.

Numerosos organismos supranacionales vinculados a los intereses capitalistas defienden las mismas posiciones acerca de la conveniencia de subordinar las políticas educativas a la necesidad de formar una mano de obra adecuada a las exigencias del mercado y de crear nuevas oportunidades de negocio con unas expectativas de beneficio inmensas.

Lo que no se dice habitualmente es que estos organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la propia OCDE han impulsado políticas de este calibre que han sido ya aplicadas en países por ejemplo de Latinoamérica con unos resultados desastrosos para la inmensa mayoría de la población, lo que ha supuesto un incremento de las tasas de analfabetismo, el aumento de la segregación social, unos enormes índices de abandono escolar, en definitiva, un empobrecimiento de la población y un aumento de la desigualdad social....

Capítulo I Europa 2000/2010

Para la Comisión europea, la “nueva economía basada en el conocimiento” exige una transformación radical de la economía europea así como un ambicioso programa de *modernización* del bienestar social y de los sistemas educativos.

En el Consejo europeo de Estocolmo celebrado en marzo de 2001 se adoptaron tres objetivos estratégicos que deberían ser alcanzados antes de 2010, que implican que los sistemas de educación y formación deben combinar “calidad, accesibilidad y apertura al mundo”. En 2002, en su reunión de Barcelona se

aprobó el documento “Educación y Formación 2010” que ratificó la propuesta de los ministros y ministras de Educación de hacer que los sistemas educativos europeos “se conviertan en una referencia de calidad mundial para 2010”.

En el Seminario organizado a finales de noviembre de este año 2004 por el MEC, en el marco del debate sobre la reforma del sistema educativo en el Estado Español, tuvimos la ocasión de asistir en directo a la presentación de distintas experiencias tanto por parte de países miembros de la UE desde hace tiempo como de miembros más recientes como es el caso de Hungría.

Lo más llamativo - se trataba de analizar los “Objetivos de los Sistemas Educativos Europeos para 2010. Las Políticas Nacionales”, era la coincidencia extrema en cuanto a dichas políticas, al lenguaje utilizado y a la asunción por parte de las personas participantes de la nueva Biblia neoliberal aplicada a las cuestiones educativas.

Entre los objetivos europeos, el primero, **mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de educación y de formación de la UE**, se hace especial hincapié en la garantía para todos de acceder a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, en adelante), en aumentar el número de personas matriculadas en estudios científicos y técnicos, mejorar la formación del profesorado y desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento y aprovechar al máximo los recursos.

En el segundo, **facilitar el acceso de todos (sic) a los sistemas de educación y formación**, se reivindica un entorno de aprendizaje abierto, hacerlo más atractivo y promover la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

Por último, el objetivo 3, **abrir los sistemas de educación y formación al mundo exterior**, se recomienda reforzar los lazos con la vida laboral y la investigación y con la sociedad en general, desarrollar el espíritu empresarial, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación europea.

Aún se está lejos de alcanzar estos objetivos en la mayoría de países tanto de los 15 como de los que acaban de entrar en la Unión europea. Las diferencias entre países siguen existiendo, sobre todo derivadas del distinto peso que el gasto educativo tiene en cada país, pero también de otros elementos como la duración de los estudios comunes, o la existencia de semimercados escolares. Recordemos que el Estado Español destina menos de un 4,5% del PIB a educación, frente a un 4,9% el año 89.

Panorama europeo: las políticas educativas-

A pesar de los esfuerzos de los distintos gobiernos europeos, el debate sobre cuestiones educativas suscita controversia en la mayoría de los países actualmente. En los tres Foros Sociales Europeos celebrados en los últimos años (Florencia, París y Londres) el debate sobre la educación y las amenazas que se ciernen sobre los sistemas educativos públicos centraron muchos de los debates en talleres, plenarios y seminarios. Las conclusiones van siendo cada vez más coincidente: en los distintos países se intentan aplicar unas políticas educativas cortadas por el mismo patrón. Las diferencias parecen estar marcadas por las tradiciones de cada estado más que por las nuevas políticas, que responden a esquemas similares.

No obstante, la respuesta no se ha hecho esperar: huelgas, manifestaciones, resistencia en definitiva a los planes de diferentes gobiernos, agitan hoy el panorama europeo y ponen en evidencia la gravedad de los ataques que dichos sistemas educativos están sufriendo. En Italia, el 15 de noviembre de 2004, se desarrolló una de las huelgas con mayor repercusión en la enseñanza de ese país: con ella se exigía la abolición de la Reforma Moratti, nombre de la actual ministra de Educación, una de las más fervientes a la hora de aplicar los dictados de las empresas y de la Iglesia Católica.

También en Francia varios sindicatos han convocado huelga el 7 de diciembre contra la llamada Ley de Orientación que el gobierno Raffarin pretende promulgar, tras el informe Thélot.

La aplicación de los principios acordados en Lisboa en el año 2000 está teniendo un enorme impacto en las políticas sociales de los países miembros.

La reciente ampliación de la Unión europea también pone de manifiesto la desigualdad que existe entre los diversos países dependiendo de su historia reciente y de la importancia que en el pasado tuvieron los sistemas educativos.

En Inglaterra, durante el pasado Foro Social Europeo celebrado en octubre de 2004, distintos Seminarios prestaron especial atención a las políticas educativas de carácter totalmente neoliberal que el gobierno laborista de Tony Blair está llevando a cabo.

También durante este seminario tuvimos la ocasión de escuchar a representantes de países como Rusia o Turquía presentándonos la situación de sus países, equivalente a la que vemos en la Unión europea.

Las tres “i”: inglese, informatica, impresa...

Cuando la señora Moratti se hizo cargo del ministerio de educación italiano, sus primeras medidas consistieron en derogar la ley promulgada por el anterior gobierno de centro izquierda, abriendo el camino a la adecuación escuela-empresa y a la utilización del nuevo lenguaje economicista al uso. Otras medidas adoptadas se refieren a la supresión del término “público” en el nombre de su ministerio o a la entrega de una prima a cualquier familia que opte por la escuela privada. La drástica disminución de fondos destinados a la escuela pública, la utilización de la autonomía de las escuelas para favorecer la competitividad entre ellas y su privatización, el fomento de prácticas como el pago de las familias o la búsqueda de sponsors que patrocinen económicamente la escuela muestra a las claras la verdadera política del gobierno Berlusconi.

La señora Moratti, católica convencida, pretendía enseñar las teorías creacionistas dentro de la escuela, como si Darwin nunca hubiera existido. Por otra parte, la enseñanza de la religión católica se convierte en obligatoria, siendo el profesorado de esa religión el único que ha tenido nuevos nombramientos este curso. Se trata de un profesorado nombrado directamente por la Iglesia católica.

Las tres i, impresa, informatica, inglese, (empresa, informática, inglés) se convierten en la receta mágica de la nueva escuela italiana. Pero en esto, Italia actúa como el resto de países europeos.

El caso de Inglaterra sirve como laboratorio de las políticas educativas del resto de países. A pesar de que el propio gobierno Blair reconoce su fracaso en múltiples aspectos, las medidas que se pretenden aplicar actualmente van en la línea de considerar la enseñanza como una mercancía más...

Por una parte, las escuelas se gestionan como cualquier otra empresa: en el caso de que un establecimiento escolar no alcance unos resultados “satisfactorios”, se procede a sustituir al director. Si los malos resultados persisten, se cambia al claustro entero. Si aún siguen siendo malos, la escuela se cierra y se procede a su venta a una empresa privada. Empresas vinculadas por ejemplo a la venta y fabricación de armamento, como SERCO, se han hecho cargo de la gestión de varias escuelas en Inglaterra, así como de la gestión de la inspección educativa, de la formación del profesorado.... Pero además de abrir el sistema escolar a empresas privadas, su pretensión es la de que las propias escuelas se conviertan en empresas. En una ley aprobada recientemente, el gobierno autoriza a los centros educativos a crear sus propias empresas para ofrecer a clientes externos sus instalaciones y servicios.

El gobierno británico pretende de esta manera por una parte ahorrar, destinando menos dinero a la enseñanza y por otra colocarse en una buena posición en el mercado global de prestaciones de servicios educativos. Como veremos más adelante, el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS, en adelante) pretende convertirse en el marco legislativo que consagre esta tendencia.

El caso francés hizo levantar oleadas de indignación frente a las pretensiones de los gobiernos conservadores de ese país. Las reformas que vienen afectando a la escuela pública en Francia están siendo rechazadas a través de huelgas y manifestaciones, pero el gobierno, tras encargar un informe exhaustivo a un “experto”, Claude Thélot, sigue en sus trece y pretende aprobar la llamada Ley de Orientación propuesta por el actual ministro, señor Fillon. Las propuestas que contiene el informe Thélot van en el mismo sentido de intentar adaptar la escuela a las demandas de las empresas: reconociendo que la estructura del mercado laboral ha cambiado, y que se prevé un número cada vez mayor de empleos no cualificados en el futuro próximo, se intenta reducir la misión de la escuela para todos a proporcionarles unas competencias mínimas que permitan a ese futuro trabajador o trabajadora adaptarse a nuevos puestos de trabajo que no requieren conocimientos sino una serie de competencias, de destrezas, que permitan una rápida adecuación a ese mercado laboral cambiante.

Cuando se habla de conocer las TIC o los idiomas- el inglés, queremos decir- no se trata de que sean necesarias personas con una formación en Ingenierías, Programación o Filólogos de última generación. Se trata de dotar al alumnado de competencias mínimas en esos ámbitos así como en lectura, escritura, cálculo, imprescindibles para empleos que requieren baja cualificación como los que ya sabemos que serán los más demandados en el futuro. A estas destrezas básicas se añade, entre otras, el desarrollo del espíritu empresarial, la “cultura emprendedora” como forma curiosa de combatir el paro.

El informe Thélot recoge de forma explícita que es necesario además que el sistema educativo francés se dedique también a formar las elites necesarias para dirigir ese mundo cada vez más polarizado al que se nos prepara.

Las propuestas que se hacen en ese informe se basan en la necesidad de acabar con una época en la enseñanza: la época de la masificación escolar que respondía a las necesidades de mano de obra creciente tras la segunda guerra mundial. Esta deja paso a otra época en la que la reducción de la presión fiscal sobre las empresas se ha de traducir en la disminución de los impuestos para permitir que nuestras (¿nuestras?) empresas se vuelvan cada vez más competitivas.

Las propuestas que se hacen en el informe no hablan en ningún momento de aumentar el gasto público en educación, ni hacen ninguna referencia a la reducción del número de alumnos/as por aula y por enseñante, ni a la mejora de las condiciones de escolarización y de trabajo del profesorado.

Por el contrario, se propone adelantar la edad de separación del alumnado en itinerarios (se utilizan las viejas teorías de que no todo el mundo tiene la misma capacidad y por lo tanto es una utopía pretender que la inmensa mayoría de jóvenes alcance una titulación secundaria) y poner en práctica medidas que han sido rechazadas en países vecinos.

Este es el caso de Alemania, que aparece en muchas encuestas internacionales en puestos de cola. Durante la tramitación de la LOCE, el gobierno de José María Aznar ponía como ejemplo para defender la existencia de una segregación precoz entre el alumnado de secundaria, la experiencia alemana.

En ese país, la existencia de una triple red de secundaria (Hauptschule, Realschule y Gymnasium) fuertemente basada en orígenes sociales del alumnado se ha mostrado como un fracaso estrepitoso que el gobierno alemán pretende modificar para no agravar su situación.

Los tests internacionales, (PISA, UNESCO...), que muchas veces son utilizados por los distintos gobiernos para justificar sus propios intereses, esconden, a pesar de los defectos técnicos que presentan, realidades escolares como esta. Lo que parece paradójico es que tras el fracaso de Alemania en esa vía, otros países persistan en la misma política.

Mención aparte merece un país como Bélgica, farolillo rojo en muchos de esos estudios internacionales. La existencia de un semimercado escolar, con la presencia abrumadora de la enseñanza confesional subvencionada por el estado, como recoge la constitución de ese joven país, parece determinante a la hora de analizar, como dice Nico Hirtt en su informe, la catástrofe escolar belga.

Como podemos ver, el análisis de lo que ocurre en Europa es coincidente, pero aún no ha sido posible articular una respuesta conjunta de quienes defendemos la escuela pública y luchamos en contra de su conversión en una mercancía más.

En el Foro Mundial de Educación, en julio de 2004 en Porto Alegre, se presentó una Plataforma Mundial de Luchas que pretende recoger las principales reivindicaciones y preparar una agenda planetaria de movilizaciones en contra de la privatización de los sistemas educativos.

La organización de una Jornada Europea de Lucha en Defensa de la Educación Pública, propuesta reiteradamente en el FSE es un reto que posiblemente empiece a ver la luz en el año 2005. Sería un paso fundamental para articular las luchas que en cada estado se están desarrollando actualmente.

EL AGCS y el futuro de la educación

Hemos visto cómo en los distintos países europeos se está produciendo una tendencia que favorece la mercantilización de la educación, es decir, la consideración de la educación como algo que se puede comprar y vender, y cómo se insta a las escuelas a adoptar modelos de gestión empresariales. Además, se promueve la existencia de partenariados con empresas o la búsqueda de patrocinadores privados para garantizar el funcionamiento de las escuelas.

El marco legislativo que podría otorgar un estatus de legitimidad a esas prácticas es el AGCS, cuya finalidad es la “de establecer un marco normativo internacional para el comercio de servicios, contribuyendo así a su expansión progresiva”. Para hacer esto posible, los países miembros de la Organización Mundial del Comercio deberían liberalizar sus mercados, es decir, facilitar desde el punto de vista legal, la eliminación de todo tipo de barreras que pudieran poner en peligro la venta de “servicios” como la educación. Incluso reglamentaciones laborales que protegen el estatus por ejemplo del profesorado pueden llegar a ser modificadas para defender la posibilidad de que empresas transnacionales se conviertan en proveedores de ese servicio.

Hasta ahora, la educación no se consideraba un bien susceptible de ser comprado y vendido. Pero las nuevas tendencias que ya hemos apuntado van en otra dirección. Esto se debe a la considerable parte que los servicios están adquiriendo en la economía mundial (en torno al 50% del PIB mundial). Se trata de que derechos básicos como la educación, la sanidad o el agua, pasen puedan ser objeto de compra y venta.

La situación en el Estado Español

En el mes de junio, el nuevo gobierno paralizó algunos de los peores aspectos de la LOCE, impuesta junto con la Ley de FP y las cualificaciones y la LOU por parte del anterior gobierno de José María Aznar. Ese era marco legislativo a través del cuál se pretendía en el Estado Español aplicar las medidas acordadas en Lisboa en el año 2000. El PSOE, tras ganar las elecciones en marzo de 2004, prometió abrir un debate sobre la educación. Curiosamente, en estos momentos muchas organizaciones reclaman un pacto escolar para acabar con las continuas reformas, incluso quienes como el PP hace poco imponían el actual marco legislativo sin ningún consenso y en contra de la mayoría de la comunidad educativa.

Antes de las elecciones, el PSOE y los demás partidos de la oposición, junto con AMPAS y sindicatos de profesorado y estudiantes, exigieron reiteradamente la derogación del marco legislativo educativo. Pero ahora, las propuestas de reforma del sistema recientemente presentadas no responden a las expectativas levantadas por el PSOE cuando rechazaba categóricamente las tres leyes.

Se debería aprovechar esta oportunidad para construir un sistema educativo verdaderamente democrático, igualitario, laico, donde la diversidad sea considerada como una riqueza que hay que cuidar, como plantea la Confederación de STEs-i junto a otras fuerzas que defienden la prioridad de la escuela pública.

Pero la aplicación de los objetivos marcados por la Unión europea, como se puso de manifiesto en el Seminario Internacional organizado por el MEC, nos indica que a pesar de haber paralizado algunos de los aspectos de la LOCE, otros podrían seguir adelante: el mantenimiento del sistema de conciertos con centros privados en los niveles no obligatorios, la falta de compromiso explícito para dotar de personal y recursos a todos los centros o para reducir el número de alumnos/as que tiene que atender cada enseñante, la consagración de un sistema de designación de directores/as que rompe con la tradición democrática en nuestros centros, el mantenimiento de la asignatura de religión y de su alternativa...

De hecho, muchas Comunidades Autónomas, con gobiernos de diferente signo, están aplicando políticas que van en la línea tan bien definida por Silvio Berlusconi: las tres ien italiano: informática, inglés, empresa.

Estas son las prioridades que el mercado demanda, para fabricar una mano de obra flexible, para que el trabajador o trabajadora sea empleable y por lo tanto esté dispuesto a cambiar de empleo cuantas veces sea necesario. La "formación a lo largo de toda la vida" no se refiere al derecho a aprender para todas las personas, sino a la obligación de formarse durante su tiempo libre para adaptarse a las nuevas exigencias empresariales. Por eso ya no es necesario que nuestros jóvenes adquieran una sólida formación y unos conocimientos que les permitan comprender y transformar el mundo en el que vivimos.

Las propuestas "estrella" de la reforma que propone el PSOE actualmente-estamos a la espera de conocer el nuevo articulado de la Ley- se refieren a los objetivos marcados para 2010 por la Unión europea. Pero las inversiones en idiomas o en Nuevas Tecnologías no pueden hacerse dejando de lado otros objetivos prioritarios: garantizar una red pública de calidad que atienda a toda la población escolar independientemente de su lugar de residencia o de su situación social.

En vez de cuestionar la situación de dualización creciente del sistema educativo, en ningún momento se pone en tela de juicio la existencia de dos redes educativas: ni siquiera se llega a proponer medida alguna que frene el proceso, agudizado hasta extremos increíbles en algunas ciudades o comunidades autónomas (en Barcelona, el 60 por cierto del alumnado hasta los 18 años estudia en colegios concertados; en Euskadi, el porcentaje supera ya el 50%). Por lo tanto, la prioridad de la enseñanza pública que el actual presidente del gobierno reivindicó, se queda, en el documento presentado por el MEC, en una declaración de intenciones.

Es imprescindible también en nuestro país, una movilización social en torno a la defensa de una escuela pública, laica, democrática, financiada a través de una Ley específica que garantice los medios para acabar con el fracaso escolar. La situación de definanciación que sufre la enseñanza pública en el Estado Español, debe acabarse al finalizar esta legislatura. Incrementar el gasto hasta un 7% es imprescindible para recuperar el retraso histórico que venimos arrastrando. Es necesario que nuestro gobierno intente luchar contra la mercantilización de la enseñanza. Declaraciones como las realizadas por los ministros de Educación brasileño y argentino y por los sindicatos CNTE y CTERA recientemente donde se oponían a la liberalización del comercio de servicios educativos y a la inclusión de la educación en el ALCA, pueden mostrar la vía. Es aún posible oponerse a las políticas neoliberales, también en Europa. Eso es lo que

debemos exigir a nuestro gobierno: convertir al sistema educativo público en el garante de una sociedad más justa para todos y todas.

Capítulo II

El impacto de las políticas educativas neoliberales en el Estado Español

A) Cuestiones generales

1. Panorama educativo español: nuevas leyes educativas estatales: la privatización de la e en marcha.
2. La dualización del sistema educativo español: un mal que se va agravando.

B) Impacto de las medidas neoliberales en las trabajadoras y trabajadores de la educación:

- Oportunidades laborales y adecuación del empleo: el caso atípico en Europa
- Situación de los y las trabajadoras en la enseñanza (despidos, precariedad y paro). Inestabilidad provisionalidad y pérdida de derechos.
- La salud laboral y los graves incumplimientos en la materia por parte del Estado y las empresas. Ausencia de delegados de protección laboral.
- Aumento de las exigencias hacia los trabajadores: consecuencias en la salud laboral del profesorado.
- Jerarquización. La gestión burocrática de los centros. La competencia entre centros y la ev discriminatoria.
- Discriminaciones salariales: divide y vencerás
- Formación inicial y permanente del profesorado: otra oportunidad perdida
- Infraestructuras educativas y condiciones de trabajo materiales
- La reducción del gasto público en educación: pérdida del poder adquisitivo de trabajadores deterioro calculado de la enseñanza pública.
- Riesgos para la seguridad y la salud. Privatización del servicio de Prevención de riesgos laborales

A) Cuestiones generales

1. Panorama educativo español: nuevas leyes educativas estatales: la privatización de la e en marcha.

La situación actual del sistema educativo en el Estado Español está marcada por el vigente marco que afecta a los niveles universitarios (LOU), de formación profesional (Ley de FP) y al sistema educativo en general (la LOCE). Este nuevo marco legislativo fue puesto en marcha por los gobiernos del Partido Popular. Actualmente siguen en vigor aunque algunas de sus disposiciones han sido paralizadas recientemente tras el triunfo del PSOE en las elecciones de marzo de 2004. En septiembre de 2004 se presentaron las nuevas propuestas para una nueva Ley de Educación, que entrará en vigor dentro de un año.

Si analizamos el contenido de dichas leyes, podemos deducir que tanto la concepción del sistema educativo como las medidas que conlleva se alejan cada vez más de una concepción democrática de la enseñanza y avanzan en la línea de la privatización del sistema educativo. Diferentes plataformas y organismos de defensa de la escuela pública, en las que se integran organizaciones políticas y sindicales que representan tanto a la mayoría de la población en el primer caso, como a la mayoría del profesorado, reiteraron durante el periodo de gestación de dichas leyes, su más rotundo rechazo a la concepción elitista de la enseñanza, a la mercantilización de la educación y al empeoramiento de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza que traen consigo. Dichas leyes vinieron precedidas por líneas de actuación en todos los ámbitos que iban incidiendo negativamente en el sistema educativo del estado español y en la precarización de las condiciones de trabajo del profesorado y demás personal que trabaja en educación.

En el caso del Estado Español, existen 17 Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en materia educativa. Eso quiere decir, que el marco legislativo general es de ámbito estatal, pero la gestión y la concreción de cada ley dependen de los 17 gobiernos autónomos. Esto supone que las condiciones de trabajo del profesorado son distintas en cuanto a salarios, horarios y organización pedagógica. Existe, no obstante la posibilidad de traslados entre las diferentes administraciones, teniendo entonces los derechos y deberes propios de cada régimen autonómico. Otra característica importante de la situación del profesorado en el Estado Español es el altísimo nivel de precariedad laboral: en efecto, en el conjunto del estado hay 70000 profesores y profesoras que en algunos casos llevan más de 20 años de servicio para las administraciones educativas, sin que hayan tomado medidas para resolver este problema. Las autoridades españolas han sido reconvenidas por diversos organismos internacionales por mantener esa situación y no poner mecanismos para resolverla como han hecho otros países de nuestro entorno.

Otra característica fundamental del sistema educativo es la existencia de una triple red educativa: una red pública, otra privada y una tercera red privada subvencionada por el estado para las enseñanzas no universitarias. Esta situación va evolucionando de manera que la red pública va disminuyendo su volumen al tiempo que aumenta sobre todo la red privada subvencionada, la Enseñanza Concertada. El peso de esta enseñanza varía según la Comunidad Autónoma de que se trate. Las condiciones de trabajo del profesorado de estas redes difieren de las del profesorado de la red pública. Existen convenios colectivos estatales diferenciados según el tipo de enseñanza que imparten.

2.- La dualización del sistema educativo español: un mal que se va agravando.

La dualización, pues, del sistema educativo español se va acrecentando. La llegada masiva de inmigrantes procedentes de otros países viene a llenar el vacío de la bajada de la natalidad, que hasta hace unos años era de las más elevadas del mundo. Así se produjo una reducción del número total de alumnos y alumnas que empieza a frenarse desde el curso 2003/2004. Las familias procedentes de otros países tienen por lo general un número mayor de hijos e hijas lo que está invirtiendo la tendencia y haciendo que aumente en los niveles de infantil y primaria, el número de alumnos y alumnas, que este curso ronda los 7 millones en enseñanza no universitaria.¹

La existencia de centros privados financiados con fondos públicos está favoreciendo en muchas comunidades autónomas la dualización de este sistema educativo. El régimen de concertados educativos fue puesto en marcha en torno a los años 80 por parte de los gobiernos del PSOE, que para atender la demanda creciente de plazas escolares, en vez de construir centros públicos, optó por subvencionar los tramos obligatorios de las enseñanzas no universitarias a colegios que ya existían, fundamentalmente en zonas urbanas, regentados en su inmensa mayoría por órdenes religiosas católicas. Pero esta situación venía heredada de la época franquista,² donde el papel de la Iglesia Católica en la formación de las clases medias y las elites fue importantísimo.

¹ El País, El nuevo curso escolar, (6-09-2004)

² Como indica el Colectivo Baltasar Gracián, “Enseñanza pública y concertada: un inevitable antagonismo”, en

La extensión de los conciertos educativos a niveles no obligatorios se produjo sobre todo con los gobiernos del Partido Popular. No obstante, estas subvenciones a niveles no obligatorios se dan a comunidades de diverso signo político.

Se está produciendo un vuelco significativo en cuanto a la distribución del alumnado en las redes pública y concertada. La presencia de la red privada es meramente testimonial, en la mayoría de los territorios, ya que las órdenes religiosas se han apuntado mayoritariamente al carro de las subvenciones. En teoría, los centros que reciben fondos públicos deberían respetar una serie de condiciones como la gratuidad de las enseñanzas o la admisión de todo tipo de alumnado. Ese no es el caso, ya que hay prácticamente ningún expediente sancionador por el incumplimiento de la normativa.

Esto supone en realidad que la mayoría de los centros concertados seleccionan a su alumnado de cobros encubiertos de tasas (actividades extraescolares, Asociaciones de Padres o Estudiantes, material escolar...) u otros mecanismos sutiles destinados a garantizar la no presencia de alumnos con dificultades, de origen social desfavorecido, o inmigrante.

Esto está haciendo en realidad que los centros públicos de las grandes ciudades atiendan a la población escolar con más dificultades mientras las clases medias escolarizan a sus hijos e hijas en los centros concertados. Las razones son múltiples, pero se detecta en muchas Comunidades Autónomas un abandono de la atención presupuestaria a la escuela pública y un transvase de fondos hacia los centros concertados....Esto supone un deterioro de las condiciones de escolarización y el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado, como veremos más adelante. Se han llevado a cabo campañas mediáticas donde la escuela pública es mostrada negativamente, lo cual ha contribuido más al deterioro de su imagen. La situación de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza ha venido empeorando como consecuencia de la falta de fondos destinados a la enseñanza pública: el porcentaje del gasto en educación PIB se redujo de un 4,9 en el año 1993 a un 4,5 % en 2003. Y esta reducción se produce teniendo en cuenta el aumento de la escolaridad obligatoria y la extensión de las subvenciones a los colegios privados incluso en niveles no obligatorios, tendencia que se está reforzando en los últimos años. Por el contrario, el profesorado se encuentra ante nuevos retos (alumnado que desconoce la lengua y/o la cultura españolas, familias desestructuradas cuya situación repercute en la escuela, los hijos/as, falta de renovación y por lo tanto envejecimiento de la media del profesorado, falta de formación específica, incremento de tareas sin reducción de carga lectiva....) que no son abordados adecuadamente por las administraciones.

B) Impacto de las medidas neoliberales en las trabajadoras y trabajadores de la educación.

Las medidas impulsadas por organismos internacionales y defendidas por la Comisión europea abren la puerta a un empeoramiento de la situación laboral del profesorado en el estado español y a la introducción de

“ya el régimen franquista, además de conceder a la Iglesia Católica enormes privilegios, le otorgó créditos ventajosos para construir sus colegios y, aunque la necesidad de responder al incremento demográfico y a las nuevas demandas educativas obligaron a que, entre 1964 y 1971, la mayor parte de las inversiones del Estado en enseñanza se dirigiera al sector público, la iniciativa privada siguió contando con una parte nada despreciable del presupuesto educativo estatal. En 1970, la LGE, con el pretexto de *garantizar la gratuidad* a una demanda creciente, inició una política de subvenciones que cubría entre el 50 y el 100% de los gastos de personal y funcionamiento. Estas subvenciones estaban supeditadas a una serie de condiciones (atender a poblaciones marginadas, estar situados en zonas con deficiente escolarización pública, etc..) que nunca se cumplieron, lo que no impidió que las subvenciones se cobrasen. Por otra parte, la ley reconocía al sector privado un carácter subsidiario del público.

Entre 1973 y 1982, las subvenciones pasaron de 1.510,9 millones a 78.922,1 millones de pesetas. Con la llegada del PSOE al poder, las subvenciones a la Iglesia Católica siguieron aumentando (313.474 millones de pesetas en 1994) y, en algunas Comunidades Autónomas, se extendieron a niveles educativos no obligatorios. Felipe González se atrevió a decir que “ningún gobierno de la derecha ha regalado tanto dinero a la enseñanza privada”.

Evidentemente, estas subvenciones han seguido aumentando bajo el gobierno del Partido Popular.

empresariales en la gestión escolar. Las amenazas se ciernen sobre la garantía de un derecho universal a la educación y su transformación en una mercancía susceptible de ser comprada por quienes disponen de los suficientes recursos y vendida por grandes empresas que descubren en el mundo escolar un nuevo mercado que les garantice sustanciosos beneficios. El AGCS es hoy por hoy una de las mayores amenazas en este sentido.

Pero las políticas neoliberales en educación han venido aplicándose en nuestro país, influyendo negativamente tanto en las condiciones laborales del profesorado como en la agudización de las diferencias sociales. Veamos algunos de esos aspectos.

- **Oportunidades laborales y adecuación del empleo: el caso atípico en Europa**

El caso del Estado Español es atípico: mientras en muchos países europeos la escasez de profesorado y la moneda común, en nuestro caso, muchas personas ven en el acceso a la docencia en la enseñanza pública la posibilidad de un empleo “seguro”. Esto debe entenderse en el marco de un país donde las condiciones laborales del conjunto de trabajadores y trabajadoras se precariza cada vez más, con un aumento vertiginoso de los contratos temporales, y donde la tasa de paro, sobre todo la del paro femenino, es de las más elevadas de Europa Occidental.

No existe una formación de la misma duración para todas las personas que deseen acceder a la enseñanza, pues para las etapas de Enseñanza Infantil y Primaria se requiere una formación universitaria de tres cursos, mientras que para acceder a la enseñanza secundaria se requiere una formación de al menos cinco años, y un curso de formación pedagógica posterior. Es decir, que personas que concluyen sus estudios universitarios y no encuentran un empleo adecuado a sus expectativas se vuelven hacia la enseñanza.

Esto se acompaña, como indicamos más arriba, con una situación de precariedad de al menos de las profesoras y profesores interinos, que en muchos casos llevan 20 años al servicio de las administraciones educativas. La precariedad en el sector es escandalosamente alta: el propio D. del Pueblo presentó un informe recientemente donde acusa a las Administraciones Públicas de empleo eventual de forma abusiva. Casi un 20% del profesorado de la enseñanza pública no universitaria es eventual, habiendo prestado sus servicios a la Administración la mayoría de ellos durante más de tres años, lo cual tendría que haber supuesto la conversión de sus puestos de trabajo a fijos o bien el despido. La Administración utiliza a este profesorado como mano de obra barata: cobran antigüedad, carecen de los derechos que tiene el resto del profesorado y pueden ser desahuciados de un curso a otro.

Por otra parte, al no existir un sistema de acceso diferenciado (reivindicado por el colectivo con movilizaciones y huelgas durante estos últimos años), las expectativas de empleo para las personas que deseen acceder al sistema por primera vez, se ven mermadas, lo que contribuye a la generación de un empleo no declarado entre las personas que aspiran a ser profesores de la enseñanza pública.

- **Situación de los y las trabajadoras en la enseñanza (despidos, precariedad y paro). Inestabilidad, provisionalidad y pérdida de derechos.**

Como hemos señalado más arriba, la situación del profesorado interino en el Estado Español es de situaciones insostenibles. Algunas CCAA han tomado medidas de carácter temporal para asegurar estabilidad parcial en el empleo a ese profesorado que en su mayor parte tienen más de 3 años de antigüedad en el servicio a las Administraciones educativas: se han llegado a dar casos de desahucio de personal con muchos años de antigüedad. Esta situación propia de la red pública, se da también en la red concertada, pues es el titular del centro, el empresario, quien decide a quien contrata y a quien le renueva el contrato para el curso siguiente, con la consiguiente carga de arbitrariedad.

La aparición de puestos de trabajo catalogados como medias jornadas se debe precisamente a la existencia de un ejército de reserva (profesorado interino+personal en paro) que en vez de seguir en el paro se emplea en este tipo de empleos, remunerados la mitad, pero con una carga de trabajo similar en muchos casos a la del profesorado con jornada completa.

Este profesorado no cobra por los mismos conceptos que el personal funcionario, lo que da lugar a la utilización de esa mano de obra barata le sea más rentable a la Administración educativa de que la de titularizarlos o hacerlos funcionarios a través de un sistema equitativo.

También las mujeres interinas han sufrido discriminaciones por el hecho de ser mujeres y que embarazadas. Sus derechos a vacaciones, permisos, horario de lactancia, han debido ser reivindicados muchas veces en los tribunales.

El profesorado que obtuvo su puesto de funcionario/a sigue, no obstante, sometido a los designios de la administración. Quienes aún no han obtenido destino definitivo, se ven sometidos a cambios de todos los cursos, con la implicación negativa que esto tiene para su vida familiar y para la estabilidad de las plantillas docentes y la necesaria continuidad de los proyectos docentes.

También el profesorado con destino definitivo se ve sometido a cambios que ni siquiera la legislación actual reconoce: se obliga al profesorado definitivo a abandonar su puesto de trabajo. Se tratan criterios economicistas que pretenden ahorrar lo que cuesta un profesor (de esa manera, un docente de un centro se ve desplazado a otro provisional o definitivamente a pesar de los derechos adquiridos como funcionario/a).

- **La salud laboral y los graves incumplimientos en la materia por parte del Estado y la empresas. Ausencia de delegados de protección laboral.**

Mientras que el Estado Español se sitúa a la cabeza de Europa en cuanto al número de accidentes de trabajo, la incidencia de las enfermedades profesionales es muy baja. En 1.977, con una población asalariada de 10,3 millones de personas, se registraron más de 1 millón de accidentes leves con más de 10.000 graves y más de 1000 mortales; sin embargo, sólo se reconocieron 8.440 casos de enfermedad profesional -destacándose el alza de las enfermedades musculo-esqueléticas-, ya que la normativa vigente es totalmente obsoleta: no reconoce el conjunto de enfermedades laborales. La diferencia de los accidentes de trabajo, que son algo más evidente, las enfermedades profesionales aparecen muchas veces confundidas entre las enfermedades comunes. El hecho de que el sistema Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) y de la mayoría de convenios y acuerdos del ámbito de la enseñanza se contemple la percepción del 100% de las retribuciones por cualquier baja laboral, sea cual sea su causa, hace que aparezca como algo irrelevante que una enfermedad laboral, causada por el trabajo, sea calificada o no como enfermedad profesional. Contribuye la falta de desarrollo de cultura preventiva en la sociedad en general y en las autoridades laborales, sanitarias y políticas. Sin embargo, esta situación supone un nefasto encubrimiento no amparado por la legislación actual obsoleta. Tal encubrimiento proyecta una imagen sin riesgos alguno para la salud sobre muchos sectores del mundo laboral, entre ellos el de la enseñanza. Nada lejos de la realidad.

Los estudios sobre la salud laboral de los docentes reflejan causas específicas e índices muy elevados en una serie de enfermedades. Y aunque los datos que figuran a continuación se refieren exclusivamente al personal docente, sobretudo de la enseñanza pública, hay constancia de que afectan a la enseñanza privada y al resto del trabajadores/as del sector (personal de administración y servicios, de educación especial, de limpieza y cocina, educadores sociales).

De todas formas, los estudios actuales son parciales y una de las tareas fundamentales de los Centros de Seguridad y Salud Laboral debería ser poner en marcha los Servicios de Prevención, de manera que puedan investigarse totalmente las dolencias, crearse los mecanismos adecuados para coordinar las Inspecciones Médicas y poner en marcha los Planes de Prevención de los puestos y centros escolares.

- **Aumento de las exigencias hacia l@s trabajador@s: consecuencias en la salud laboral profesorado.**

Las condiciones de trabajo del profesorado han venido experimentando grandes cambios en los últimos 20 años, que tienen que ver en muchos casos con la masificación de la escolarización, que no con la democratización. Como subraya Nico Hirtt, “durante los años 1945-1975, bajo la presión de un crecimiento excepcional y de innovaciones tecnológicas e industriales sin precedentes [...] el mercado laboral internacional experimentó un fuerte crecimiento tanto en volumen como en el deslizamiento hacia empleos que requerían niveles de cualificación cada vez más elevados. A su vez, esa transformación alimentó una demanda creciente de formación y enseñanza.”³. Pero esta masificación no supuso una democratización de la enseñanza y las desigualdades relativas entre el alumnado persisten, como indica el mismo autor.

Esto repercute directamente en la labor docente, ya que al profesorado se le exige que se adapte permanentemente a los cambios, sin que las Administraciones educativas intervengan con planes de formación del profesorado. Las tareas que se encomiendan al profesorado varían y se multiplican. Al no existir en los centros docentes personal que se ocupe de la relación con las familias, ni trabajadores sociales, ni personal auxiliar para realizar labores no estrictamente docentes, que ocuparse de todo ello es el profesorado, que en muchos casos se ve desbordado por la magnitud de las tareas.

Los continuos cambios legislativos deben ser aplicados por el profesorado, con quien no se ha a la hora de cambiar planes de estudio y sistemas de enseñanza. Por otra parte, la formación continua del profesorado se debe realizar fuera del horario lectivo, incrementando así la carga horaria a la que se ve sometido. No existe una política de formación como tal: la formación permanente está ligada al cobro de “sexenios”, lo cual supone que el derecho del profesorado a formarse y el deber de las administraciones de proporcionar esa formación se ha transformado en un mero trámite para poder cobrar esas cantidades suplementarias.

Pero quizás lo que más incide en el empeoramiento de las condiciones laborales, son demandas emocionales que el profesorado experimenta a la hora de resolver situaciones cada vez más complejas en las relaciones con el alumnado y sus familias. La diversidad del alumnado, enriquecedora de la experiencia, se llega a convertir en un handicap en aulas masificadas y con pocos recursos materiales. El incumplimiento de la normativa sobre ratios, la falta de profesorado de apoyo, el incremento del trabajo burocrático complican cada vez más la tarea docente. Ello influye de forma determinante en la salud del profesorado.

- **Jerarquización. La gestión burocrática de los centros. La competencia entre centros y evaluación discriminatoria.**

Tanto las leyes actualmente en vigor en el Estado Español, como las que el PSOE puso en marcha en su momento (LOPEGCE)⁴, abren la vía a una gestión burocrática de los centros, y a la transformación del modelo participativo tradicional en el Estado Español, por otro basado en la aplicación del modelo empresarial jerarquizado en la organización de los centros educativos.

La existencia de Consejos Escolares en los centros, una de cuyas misiones fundamentales era la elección del director o directora del centro, garantizaba la participación de todos los estamentos en la vida de los centros escolares y era un elemento imprescindible para una mínima participación de la comunidad educativa en las decisiones que las afectaban. Con el nuevo marco legislativo, esta competencia, junto a muchas otras, desaparece para pasar a manos de la administración correspondiente.

³ Nico Hirtt, “Los nuevos amos de la escuela”, Minor Network 2003.

⁴ Ley Orgánica 9/1995 de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCE), de 20 de Noviembre de 1995

Estas medidas se complementan con el establecimiento de nuevas categorías salariales y cuerpos que pretenden fraccionar al profesorado y dividirlo en más cuerpos. La reivindicación tradicional de los sectores progresistas es la defensa de un único cuerpo de profesorado. Pero parece claro que las directrices que siguen los distintos gobiernos que se han sucedido van en el sentido contrario: división, mayor jerarquización y menos participación de la comunidad educativa.

El incremento de tareas burocráticas por parte del profesorado, se debe por una parte a la falta de puestos de trabajo de personal no docente, (para un Instituto de Enseñanza secundaria en torno a 100 alumnos existen únicamente dos puestos de trabajo de Auxiliar Administrativo) y por otra a la demandas crecientes de las Administraciones.

La gestión burocrática se pretende aplicar criterios empresariales a los centros educativos.

La LOCE profundiza esas tendencias. La competencia entre centros es la base de esa política empresarial que pretende aplicarse en la escuela. La diferencia de resultados académicos entre centros y otros será utilizada, si la nueva Ley de educación mantiene esos criterios, para dotar de recursos a quienes mejor parados hayan salido de esa evaluación. Este tipo de evaluaciones favorece aquellos centros que tengan un mejor nivel de partida e incrementarán las diferencias entre centros, como se está viendo en países de nuestro entorno. Como señalan informes de la OIT, “los organismos de formación del sector público se ven obligados a competir con los otros para obtener contratos de formación”⁵. De esta manera, las familias aumentarán la presión sobre los centros escolares y por ende sobre el profesorado de los mismos, para conseguir una mejora de las posiciones individuales de sus hijos o hijas.

La evaluación externa de los centros según el modelo de la LOCE, por tanto, tiene un sentido jerarquizador, pues establece rankings de centros, y discriminatorio para el alumnado y el profesorado, pues destina menos recursos a aquellos centros con peores resultados.

Además, los criterios en los que se basa esta evaluación no tienen nada que ver con el mundo educativo, sino con el de la eficacia, la obtención de resultados en abstracto, en definitiva, con la gestión empresarial de la escuela.

- **Discriminaciones salariales: divide y vencerás**

La discriminación salarial entre el profesorado se debe a la creciente jerarquización que las sucesivas leyes educativas han venido imponiendo.

En primer lugar, existen diferencias salariales amplias entre el profesorado interino, del que he hablado más arriba, y el profesorado funcionario de carrera. En el primer caso, las diferencias son en que únicamente pueden cobrar su sueldo base pero no la antigüedad que les correspondería en algunas CCAA, donde se ha intentado soslayar ese problema). Los diversos complementos que el profesorado funcionario cobra en función del trabajo realizado, no son accesibles para el profesor o profesora interinos. Se da el caso de que este profesorado inestable ocupa puestos que conllevan una remuneración suplementaria y que no pueden cobrar por no ser funcionarios de carrera. Entre el profesorado funcionario, las diferencias vienen marcadas por varios conceptos, dependen de la categoría laboral (cuerpo) al que pertenezcan y al cargo que ocupen dentro del organigrama del centro escolar. Esto supone una creciente división salarial y un aumento de las categorías dentro del centro.

Otro concepto que abre más el abanico, es el relativo a formación. Los llamados “sexenios”, que se aplican en la mayor parte del territorio español, abren nuevas diferencias salariales, además de los vinculados a la formación, con lo que ésta se devalúa y pierde su característica fundamental de derecho del profesorado y una obligación de las Administraciones. Se trata de acreditar durante un periodo de seis años, 100 horas de formación, realizada fuera del horario lectivo, en el horario de libre disposición del profesorado.

Las divisiones territoriales agrandan aún más el abanico salarial. Las CCAA con menos recursos, donde la presión de las trabajadoras y trabajadores ha sido menor, presentan salarios más bajos que las otras.

⁵ OIT. Rapport sur l’emploi dans le monde 1998-99. Dossier de prensa.

Respecto al profesorado de la enseñanza privada o privada subvencionada, las condiciones de trabajo son peores y la remuneración más baja que en el sistema público. La principal compensación es la permanencia en general en centros de zonas urbanas, ya que estas redes no disponen prácticamente de centros en zonas alejadas de las capitales o ciudades importantes. Dependen, como empresas privadas, de la negociación colectiva dentro de convenios propios, segregados por tipo de enseñanza y en algunos casos por territorios.

La estructura salarial de todos los funcionarios públicos acaba de sufrir un proceso de privatización a través de la creación de un fondo de pensiones al que se destina una parte de la masa salarial total. Este fondo es válido para todo el profesorado de la enseñanza pública. A través de un acuerdo entre el gobierno y algunos sindicatos representativos en la función pública, se destina el 0'5% de la masa salarial total a un fondo de pensiones que van a gestionar una empresa participada por una entidad bancaria, el gobierno y por dos de las organizaciones sindicales, que por cierto participaron como firmantes del acuerdo. La selección de las empresas que iban a encargarse de la gestión del fondo. Las amenazas de privatización sobre el sistema de pensiones son cada vez mayores y vías como ésta parecen indicar claramente cuáles son las intenciones de la administración, secundadas por algunas organizaciones sindicales, que no dudan en afirmar que es normal que obtengan beneficios como accionistas del fondo. Casos como el de los sindicatos de España sucedidos en grandes empresas de todo el mundo y que han llevado a la ruina a miles de familias pueden ejemplificar lo que puede suceder con un sistema de pensiones privatizado.

- **Infraestructuras educativas y condiciones de trabajo materiales**

Los centros escolares han venido adaptándose a las nuevas exigencias planteadas por las reformas educativas y por las expectativas sociales. Pero la mayoría de los centros escolares presentan carencias derivadas de la masificación que sufren sus aulas, o del deterioro de las mismas por el uso y el tiempo.

La reducción de las cantidades destinadas a educación en los Presupuestos Generales del Estado bajaron en 10 años de un 4,9% en 1993 a un 4,5%, repercuten seriamente en las dotaciones y renovación o nueva construcción de centros.

Ya hemos subrayado la escasez de personal administrativo en los centros escolares. Pues bien, la escasez de personal no docente encargado del mantenimiento y el funcionamiento cotidiano de los centros, la escasez de puestos de trabajo de conserjes y personal de limpieza es endémica en los centros escolares. No existe personal destinado para mantenimiento del edificio, teniendo que ser subcontratado por empresas privadas. El caso de la limpieza es claro: cada vez más centros tienen contratadas de limpieza donde las trabajadoras tienen peores condiciones de trabajo y sueldos más bajos que las que dependen de la administración pública.

Tampoco existe personal de apoyo a las tareas del profesorado (ni ayudantes de laboratorio, ni personal de servicios sociales, ni personal no docente para apoyo al profesorado de educación especial y otras etapas...)

Esto repercute en el trabajo del profesorado, que debe atender todas esas tareas además de las propias de su labor docente.

En muchos lugares del Estado Español, fundamentalmente donde la llegada de personas procedentes de otras regiones o países del mundo es masiva, se da el caso de la existencia de aulas prefabricadas que no reúnen en absoluto las condiciones mínimas para escolarizar. Es el caso de Barcelona, Valencia, Madrid y otras grandes ciudades.

Pero una buena parte de las inversiones que se dedican a educación se hacen en implantar las nuevas Tecnologías en los centros escolares. Esto se ha hecho en colaboración con empresas del sector. Se han vendido material informático y contratos de mantenimiento por valor de millones de euros.

Esta inversión se hace en detrimento de otras necesidades que mencionábamos más arriba. Nada de la importancia de estos nuevos recursos pedagógicos, pero “no se comprende por qué las inversiones en las NTIC habrían de ser más productivas(en cuanto a su eficacia pedagógica) que la difusión gratuita de buenos vídeos, el acondicionamiento de locales para hacerlos más acogedores, la formación permanente del profesorado y sobre todo, la reducción del número de alumnos por clase. La propia OCDE tiene que admitirlo lisa y llanamente: “Se afirman muchas cosas respecto a los métodos pedagógicos que explotan las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela; sin embargo, contra todas las expectativas, poseemos bastante pocos testimonios sólidos y evaluaciones concretas que respalden las expectativas que suscitan estas tecnologías”.^{6,7}

Al mismo tiempo, estamos asistiendo a un incremento del número de alumnos por aula, a una disminución del profesorado que se dedicaba a tareas de apoyo y de atención a la diversidad. La repercusión para el profesorado es la creciente dificultad de abordar todas las tareas marcadas, el aumento del número total de alumnos y alumnas y de grupos que debe atender y por lo tanto, el empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado.

- **La reducción del gasto público en educación: pérdida del poder adquisitivo de trabajo y deterioro calculado de la enseñanza pública.**

Como decíamos más arriba, durante los últimos diez años se ha constatado una reducción del gasto en educación por parte de las administraciones públicas, según el informe del Consejo Escolar del Estado que recoge a su vez los datos facilitados por el Ministerio de Educación

⁸. Nos estamos refiriendo al conjunto del dinero dedicado a educación en nuestro país. Pero como señalábamos al principio de este trabajo, el crecimiento relativo del sector privado concertado

⁶ OCDE. Analyse des politiques d'éducation. 1998.

⁷ Nico Hirtt, “Los nuevos amos de la escuela”, Minor Network 2003.

⁸ Informe del Consejo Escolar del Estado 2002-2003. <http://www.mec.es/cesces/informe-2002-2003/indice.htm>
(millones de euros)

Año	Gasto Total ⁽¹⁾		Gasto Público ⁽²⁾		Gasto de las familias ⁽³⁾		P.I.B. ⁽⁴⁾
	Millones euros	% P.I.B.	Millones euros	% P.I.B.	Millones euros	% P.I.B.	
1993	23.093,2	6,0	18.810,3	4,9	4.734,2	1,2	381.747
1994	24.054,6	5,9	19.292,6	4,8	5.208,4	1,3	406.011
1995	25.818,9	5,9	20.608,6	4,7	5.697,0	1,3	437.787
1996	27.363,2	5,9	21.924,6	4,7	6.037,2	1,3	464.251
1997	28.737,9	5,8	22.785,3	4,6	6.438,0	1,3	494.140
1998	30.252,9	5,7	23.998,6	4,5	6.792,0	1,3	527.975
1999	32.363,9	5,7	25.688,4	4,5	7.152,0	1,3	565.419
2000	34.333,9	5,6	27.407,0	4,5	7.452,4	1,2	609.734
2001	36.260,0	5,6	⁽⁵⁾ 29.114,2	4,5	7.735,6	1,2	653.289
2002	38.394,3	5,5	⁽⁶⁾ 30.896,4	4,4	8.029,5	1,2	696.208
2003	40.719,6	5,5	⁽⁶⁾ 32.987,3	4,5	8.334,7	1,1	740.000

buena parte de los fondos dedicados a educación se inviertan en empresas privadas cuya existencia allí donde es rentable y no en las zonas rurales, con población dispersa o con bajas rentas. Durante estos últimos años, hemos venido asistiendo a un proceso singular, a través del que se imagen falsa de la enseñanza pública y una magnificación del sector privado. En efecto: los medios de comunicación de masas han transmitido a la sociedad la imagen de una escuela pública de baja calidad y donde los problemas de disciplina y de niveles alcanzados por el alumnado se magnificaban. A fuerza de repetir datos falsos y de desviar fondos públicos a las empresas privadas la realidad pareciendo peligrosamente a lo anunciado. La defianciación de la enseñanza pública se convirti en su peor enemigo.

La determinación a través de los Presupuestos Generales del Estado de la regulación las condiciones de trabajo de los empleados públicos merma la posibilidad de negociación colectiva. La capacidad de negociación está limitada por los gobiernos de turno que imponen en el Parlamento determinadas condiciones salariales y laborales que llevan empeorando la calidad del empleo público y disminuyendo el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores públicos. Desde 1991 hasta 2004 se ha perdido más de un 13 % salarial respecto a la subida del IPC real anual para el conjunto de las trabajadoras y trabajadores públicos. Esto ha sido así a través de congelaciones salariales y por basar las subidas de salario en previsiones del IPC y no en la subida del coste de la vida.

- **Riesgos para la seguridad y la salud. Privatización del servicio de Prevención de riesgos laborales**

La OMC recomienda a los estados la adaptación de la escuela a las necesidades y demandas del mercado. Tales exigencias han venido siendo aplicadas en el Estado Español con las consecuencias que hemos ido señalando. Los trabajadores y trabajadoras del estado español tienen además un problema agravado por el incumplimiento sistemático de la legislación vigente en materia de salud laboral. La Ley 31/95, sobre prevención de riesgos laborales y la Ley 35/2003 sobre Prevención de riesgos Laborales incluyen artículos referentes al compromiso de la dirección de la empresa o de la administración correspondiente de velar por la seguridad y la salud y por la participación de

trabajadoras y trabajadores, así como una estructura organizativa que prime la prevención, la evaluación de riesgos, las medidas preventivas, etc.

Pero en enseñanza, estamos muy lejos de alcanzar lo que marcan las leyes en vigor. El deterioro de las condiciones de trabajo del profesorado repercute en la salud. No se reconoce la vinculación de enfermedades graves con la situación laboral de los docentes. Las enfermedades reconocidas por organismos internacionales como profesionales, en nuestro caso se catalogan como enfermedades comunes, con lo que las estadísticas enmascaran la realidad de estas enfermedades. Tal parece que las enfermedades músculo esqueléticas, los problemas de la voz, los diferentes síndromes como *burnout*, etc no tuvieran relación alguna con la profesión docente.

La falta de reconocimiento social es uno de los factores que desencadenan situaciones que deben catalogarse como enfermedades profesionales y ser atajadas convenientemente.

Capítulo III

PANORAMA LEGISLATIVO ACTUAL EN EDUCACIÓN

La situación actual del sistema educativo en el Estado Español está marcada por el vigente marco legal que afecta a los niveles universitarios (LOU), de Formación Profesional (Ley de FP y las Cualificaciones) y al sistema educativo no universitario en general (la LOCE). Este nuevo marco legislativo fue puesto en marcha por los sucesivos gobiernos del Partido Popular, aunque algunas leyes de la anterior época del PSOE contenían ya aspectos muy rechazables. Actualmente las tres leyes citadas siguen en vigor aunque algunas de sus disposiciones han sido paralizadas recientemente tras el triunfo del PSOE en las elecciones de marzo de 2004. En setiembre de 2004 se presentaron las nuevas propuestas para una nueva Ley de Educación, que entrará en vigor dentro de un año.

Si analizamos el contenido de dichas leyes, podemos deducir que tanto la concepción del sistema educativo como las medidas que conllevan se alejan cada vez más de una concepción democrática de la enseñanza y avanzan en la línea de la privatización del sistema educativo. Diferentes plataformas y organismos de defensa de la escuela pública, en las que se integran organizaciones políticas y sindicales que representan tanto a la mayoría de la población en el primer caso, como a la mayor parte del profesorado, reiteraron con masivas movilizaciones durante el periodo de gestación de dichas leyes, su más rotundo rechazo a la concepción elitista de la enseñanza, a la mercantilización de la educación y al empeoramiento de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza que traen consigo. Dichas leyes vinieron precedidas por líneas de actuación en todos los ámbitos que iban incidiendo negativamente en el sistema educativo del Estado Español y en la precarización de las condiciones de trabajo del profesorado y demás personal que trabaja en educación.

En el Estado Español hay altísimo índice de precariedad laboral en el sector: en efecto, en el conjunto del Estado hay 70000 profesores y profesoras interinos, que en algunos casos llevan más de 20 años de servicio para las administraciones educativas, sin que se hayan tomado medidas para resolver este problema. Las autoridades españolas han sido reconvénidas por diversos organismos internacionales por mantener esa situación y no poner mecanismos para resolverla como han hecho otros países de nuestro entorno.

Una característica fundamental del actual ordenamiento educativo es la existencia de una triple red educativa, es decir, una red pública, otra privada y una tercera red privada subvencionada por el Estado para impartir las enseñanzas no universitarias. Esta situación va evolucionando de manera que la red pública va disminuyendo su volumen al tiempo que aumenta sobre todo la red privada subvencionada, llamada Enseñanza Concertada. El peso de esta

enseñanza varía según la Comunidad Autónoma de que se trate, mayor cuanto más alta es la renta per cápita del territorio.

La dualización, pues, del sistema educativo español se va acrecentando. La llegada masiva de personas procedentes de otros países viene a llenar el vacío de la bajada de la natalidad, que hasta hace unos años era de las más elevadas del mundo. Así se produjo una reducción del número total de alumnos y alumnas que empieza a frenarse desde el curso 2003/2004. Las familias procedentes de otros países tienen por lo general un número mayor de hijos e hijas lo que está invirtiendo la tendencia y haciendo que aumente en los niveles de infantil y primaria, el número de alumnos y alumnas, que este curso ronda los 7 millones en enseñanza no universitaria.⁹

La existencia de centros privados financiados con fondos públicos está favoreciendo en muchas comunidades autónomas la dualización de este sistema educativo. El régimen de conciertos educativos fue puesto en marcha en torno a los años 80 por parte de los gobiernos del PSOE, que para atender la demanda creciente de plazas escolares, en vez de construir centros públicos, optó por subvencionar los tramos obligatorios de las enseñanzas no universitarias a colegios que ya existían, fundamentalmente en zonas urbanas, regentados en su inmensa mayoría por órdenes religiosas católicas. Pero esta situación venía heredada de la época franquista, donde el papel de la Iglesia Católica en la formación de las clases medias y las elites fue importantísimo.

La extensión de los conciertos educativos a niveles no obligatorios se produjo sobre todo con los gobiernos del Partido Popular. No obstante, estas subvenciones a niveles no obligatorios se dan en comunidades gobernadas por el PSOE o por partidos nacionalistas.

Se está produciendo un vuelco significativo en cuanto a la distribución del alumnado en las redes pública y concertada. La presencia de la red privada es meramente testimonial, en la mayoría de los territorios, ya que las órdenes religiosas se han apuntado mayoritariamente al carro de las subvenciones. En teoría, los centros que reciben fondos públicos deberían respetar una serie de reglas, como la gratuidad de las enseñanzas o la admisión de todo tipo de alumnado. Ese no es el caso, pero no hay prácticamente ningún expediente sancionador por el incumplimiento de la normativa.

Esto supone en realidad que la mayoría de los centros concertados seleccionan a su alumnado a través de cobros encubiertos de tasas (actividades extraescolares, Asociaciones de Padres o Estudiantes, material escolar...) u otros mecanismos sutiles destinados a garantizar la no presencia de alumnado con dificultades, de origen social desfavorecido, o inmigrante.

Esto está haciendo en realidad que los centros públicos de las grandes ciudades atiendan a la población escolar con más dificultades mientras las clases medias tienden a escolarizar a sus hijos e hijas en los colegios concertados. Las razones son múltiples, pero se detecta en muchas Comunidades Autónomas un abandono de la atención presupuestaria a la escuela pública y un transvase de fondos hacia los colegios concertados....Esto supone un deterioro de las condiciones de escolarización y el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado. Se han llevado a cabo campañas mediáticas donde la escuela pública es mostrada negativamente, lo cual ha contribuido más al deterioro de su imagen. La situación ha venido empeorando como consecuencia de la falta de fondos destinados a la enseñanza pública: el porcentaje del gasto en educación PIB se redujo de un 4,9 en el año 1993 a un 4,5 % en 2003. Y esta reducción se produjo teniendo en cuenta el aumento de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años y la extensión de las subvenciones a colegios privados incluso en niveles no obligatorios, tendencia que se está reforzando en los últimos años. Por el contrario, el profesorado se encuentra ante nuevos retos (alumnado que desconoce la lengua y/o la cultura españolas, familias desestructuradas cuya situación repercute en la escolaridad de los hijos/as, falta de renovación y por lo tanto envejecimiento de la media del profesorado, falta de formación específica, incremento

⁹ El País, El nuevo curso escolar, (6-09-2004)

de tareas sin reducción de carga lectiva...) que no son abordados adecuadamente por las administraciones.

PARALIZACIÓN DEL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LA LOCE Y PROPUESTAS DEL MEC

En el mes de junio, el gobierno paralizó algunos de los peores aspectos de la LOCE y se comprometió a abrir un debate sobre la educación. En estos momentos muchas organizaciones reclaman un pacto escolar para acabar con las continuas reformas, incluso quienes como el PP hace poco imponían el actual marco legislativo sin ningún consenso y en contra de la mayoría de la comunidad educativa.

También es digna de mención la actuación de la Iglesia Católica y sus adláteres (patronales de la enseñanza concertada, sindicatos propatronales, asociaciones de padres y madres católicas, etc.) que están alimentando movilizaciones en contra de la pérdida de algunos de sus privilegios: con la LOCE, el PP cedió a las exigencias de la jerarquía católica para que todo el alumnado estudiase religión confesional o no confesional (¿) lo quisiera o no. El PSOE paralizó esta medida pero no así los conciertos en niveles no obligatorios. Las tímidas propuestas del documento del MEC son las de volver a la situación tradicional: religión y alternativa no evaluables pero de oferta obligatoria en todos los centros.

Antes de las elecciones, el PSOE y los demás partidos de la oposición, junto con AMPAS y sindicatos de profesorado y estudiantes, exigieron reiteradamente su derogación. Pero ahora, las propuestas de reforma del sistema educativo no responden a las expectativas levantadas por el PSOE cuando rechazaba categóricamente las tres leyes. Este es un momento crucial para quienes defendemos la escuela pública. Nuestra sociedad debería aprovechar esta oportunidad para construir un sistema educativo verdaderamente democrático, igualitario, laico, donde la diversidad sea considerada como una riqueza que hay que cuidar. Pero hay elementos inquietantes en la propuesta, como el mantenimiento del sistema de conciertos con centros privados en los niveles no obligatorios, la falta de compromiso explícito para dotar de personal y recursos a todos los centros o para reducir el número de alumnos/as que tiene que atender cada docente, la consagración de un sistema de designación de directores/as que rompe con la tradición democrática en nuestros centros, el mantenimiento de la asignatura de religión y de su alternativa...

Otras medidas que propone el MEC pueden ser válidas, pero se necesita un verdadero esfuerzo inversor que garantice una educación de calidad para todas y todos. Las inversiones en idiomas o en Nuevas Tecnologías no pueden hacerse dejando de lado otros objetivos prioritarios: garantizar una red pública de calidad que atienda a toda la población escolar independientemente de su lugar de residencia o de su situación social. Para ello se debería destinar el 7% del PIB al final de la actual legislatura.

Pero si nos ceñimos a la propuesta presentada por el MEC hay elementos inquietantes,

El diagnóstico de la situación actual del sistema educativo coincide en algunos casos con el que llevamos realizando quienes defendemos la escuela pública. Pero en vez de cuestionar la situación de dualización creciente del sistema educativo, origen de la mayoría de los males que aquejan a la enseñanza pública, en ningún momento se pone en tela de juicio la existencia de dos redes educativas: ni siquiera se llega a proponer medida alguna que frene el proceso, agudizado hasta extremos increíbles en algunas ciudades o comunidades autónomas e(en Barcelona, el 60 por ciento del alumnado hasta los 18 años estudia en colegios concertados; en Euskadi, el porcentaje supera ya el 50%). Por lo tanto, la prioridad de la enseñanza pública que el

actual presidente del gobierno reivindicó, se queda, en el documento, en una declaración de intenciones.

POR UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN

Es imprescindible la Derogación de la LOCE y de los diferentes decretos que la desarrollan así como la elaboración de un nuevo marco legislativo que gire en torno a la promoción y defensa de la enseñanza pública, como enseñanza democrática, igualitaria, integradora y de calidad para todas y todos.

Se debe frenar la privatización creciente del sistema educativo en el Estado español. Una educación de calidad es incompatible con la profundización en el desequilibrio de las redes pública y concertada. Es la enseñanza pública la que debe atender prioritariamente a la población escolar, por lo que allí donde haya oferta pública suficiente deberán reducirse paulatinamente los conciertos educativos. Éstos se eliminarán de los tramos no obligatorios y se garantizará una oferta de plazas escolares públicas en todos los tramos. La anunciada gratuidad de la enseñanza infantil ha de ser cubierta mediante la creación de plazas en el sistema público.

Es preciso garantizar una educación pública de calidad para todas las personas en edad escolar y para las personas adultas que lo deseen para ello, son necesarios medios que garanticen una atención personalizada y la compensación de desigualdades educativas. Se deben establecer medidas de compensación educativa para toda la población escolar que lo necesite, haciendo especial hincapié en la escolarización con plenas garantías de alumnado procedente de otros países. Hay que destinar fondos en la escuela pública para creación de empleo docente y no docente, para mejora y construcción de centros educativos y equipamiento de los mismos. Medidas como la reducción del número de alumnos/as por docente y la garantía de oferta de modalidades y optativas en todos los niveles y lugares geográficos son imprescindibles.

La gestión democrática y la no jerarquización han de ser la base de una escuela participativa. La derogación de la normativa sobre selección de directores/as y la recuperación de competencias por parte del Consejo Escolar deben ser las primeras medidas para acabar con la jerarquización y con los intentos de convertir la gestión de los centros en una tarea empresarial. La competencia entre centros docentes y entre el profesorado debe ser sustituida por formas de participación democrática y por un cuerpo único de enseñantes que acabe con la división y jerarquización entre el profesorado.

La religión fuera debe salir fuera de la escuela. Defendemos el carácter científico de la enseñanza y por lo tanto se debe excluir cualquier asignatura de carácter confesional. Para ello, el Gobierno debe revisar el Concordato y derogar los acuerdos con el Vaticano. No se debe pagar con dinero público el adoctrinamiento religioso: las creencias religiosas forman parte del ámbito privado y por tanto la enseñanza de las religiones ha de quedar al margen de la escuela.

Es imprescindible una escuela que acabe con discriminaciones sociales y de género y que proporcione al alumnado los saberes necesarios para ser capaces de comprender y transformar la sociedad en que viven. Renovada pedagógicamente, la escuela debe potenciar tanto la adquisición de destrezas que permitan un desarrollo autónomo como la de saberes que posibiliten un conocimiento más allá de lo meramente instrumental. Se hace necesario, en el actual contexto, reivindicar que la escuela es una institución de formación integral que no debe estar sujeta a las veleidades de los cambiantes mercados laborales.

Es preciso acabar con una precariedad laboral que afecta al 20% de las plantillas docentes, ocupadas actualmente por profesorado interino, cuyas justas demandas deben ser, de una vez, atendidas.

Es el momento de garantizar una formación inicial equivalente para todo el profesorado, y una formación continua dentro del horario lectivo que sea acorde con las nuevas

circunstancias sociales y escolares. Así mismo, el reconocimiento de las enfermedades profesionales específicas, la mejora en las condiciones laborales –35 horas semanales, disminución de ratios, jubilación a los 60...- y las medidas presupuestarias para mejorar infraestructuras, equipamientos y para crear empleo estable son medidas básicas que deben ser contempladas en la nueva ley. Es urgente la tarea de dignificación social de las y los docentes.

Es necesaria una ley que reconozca la realidad plurinacional y lingüística del Estado español, así como la interculturalidad, que respete los ámbitos de competencia de cada comunidad, las lenguas y las culturas específicas de cada territorio y la diversidad en su sentido más amplio.

Una ley que reconozca, en definitiva, que la escuela pública es el garante de una sociedad más justa y que, en consecuencia, ofrezca los medios adecuados para ello. Para ello, nuestro país debe destinar al final de esta legislatura un 7 % del PIB. El recorte presupuestario en educación hace que en estos momentos seamos uno de los países europeos que menos le dedica: un 4'5%, totalmente insuficiente, lo cual exige un esfuerzo para lograr situar a la enseñanza pública en el papel que le corresponde.

Bibliografía:

NicoHirtt, **Los Nuevos Amos de la Escuela. El negocio de la Enseñanza**. 2003. Minor Network.

APED: Appel pour une école démocratique. <http://www.ecoledemocratique.org/> sitio web con exhaustiva documentación.

Richard Hatcher; **State schooling, private profit** (st 70) <http://www.socialist-teacher.org/dossiers.asp?d=y&id=136>

Bernard Regan, **Not for Sale**, folleto STA (Socialist Teachers Alliance, UK)

Antoni Verges, **La educación pública ante el comercio de servicios educativos**. El caso de la OMC y del Acuerdo General de Comercio de Servicios, de próxima publicación.

Diario Clarín: **Argentina y Brasil firmaron un inédito acuerdo en educación** Los ministros del área y los gremios docentes definen a la educación como un derecho social.

<http://old.clarin.com/diario/2004/11/10/sociedad/s-03201.htm>.

Agenda Mundial de Luchas (Foro Mundial de Educación, Porto Alegre julio 2004).

http://www.portoalegre.rs.gov.br/fme/up_arquivo//Carta%20Espanhol%202004.doc

©CiberEduca.com 2005

La reproducción total o parcial de este documento está prohibida sin el consentimiento expreso de/los autor/autores.

CiberEduca.com tiene el derecho de publicar en CD-ROM y en la WEB de CiberEduca el contenido de esta ponencia.

® CiberEduca.com es una marca registrada.

©™ CiberEduca.com es un nombre comercial registrado

